

San Miguel, siete de marzo de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 6, 7, 8 y 9: Téngase presente.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que la abogada Katerin Moyano Aguirre interpone recurso de amparo en favor del acusado **Ricardo Iván Sandoval Lincopi** -actualmente sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva-, en contra de la resolución pronunciada el 3 de marzo último por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de San Bernardo (Magistradas doña Azeneth Aguilar Navarro, doña Katuska Sobarzo Sobarzo y doña Ana María Vega Ramírez), en causa RIT: 117-2024, RUC: 2110044993-2, por la cual decretó su prisión preventiva, la que considera ilegal y atenta contra la libertad individual de su representado, asegurada en el numeral 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por carecer de fundamentación.

Explica que, luego de ser absuelto el 1 de octubre de 2024 en un primer juicio oral seguido en su contra, por su presunta participación en tres delitos de homicidio calificado, dos en grado de frustrado y uno en grado de consumado y, además, por el delito de porte ilegal de arma de fuego, dicha sentencia y audiencia de juicio fue anulada por esta Corte, retrotrayendo el estado de los autos hasta la etapa previa a su celebración. Agrega que, en el intertanto, su defendido fue puesto en libertad, razón por la cual el Ministerio Público solicitó la revisión de medidas cautelares, celebrándose audiencia el 28 de febrero último en la cual se ordenó su prisión preventiva y se ordenó su detención, presentándose ante Gendarmería y posteriormente ante Carabineros de Chile para ser llevado ante el tribunal, el que por razones administrativas dejó sin efecto la prisión preventiva referida y ordenó nueva audiencia para discutir su situación cautelar, audiencia que se llevó a cabo el 3 de marzo del actual.

Refiere que en esta audiencia, tanto el Ministerio Público como los querellantes ( 1) Defensoría de la Niñez; 2) Subsecretaría de Prevención del Delito y; 3) Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de Santiago) sostuvieron la petición de prisión preventiva, en tanto la defensa argumentó en contrario en base a que la nulidad de la sentencia y el juicio oral no implica retornarlo a prisión preventiva de pleno derecho y porque la fiscalía y querellantes no



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKTBTTEZNE

hicieron alusión a ningún fundamento que permitiera configurar los requisitos contemplados en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Además, se expuso una tesis alternativa y someramente los fundamentos de ella, consistentes en que el imputado se trataría de un conductor de servicios de transporte y que trasladó a las personas que efectuaron disparos sin tener conocimiento de la presencia de las víctimas ni la intención de darles muerte, y que tampoco es posible pasar por alto la absolución decretada en el primer juicio, toda vez que en el precisamente se revisó la prueba y se concluyó la falta de participación de su representado, proponiendo cautelares proporcionales y de menor intensidad.

Alega que el Tribunal resolvió decretar la prisión preventiva dando fundamentos meramente genéricos y abstractos, tales como las alegaciones de las partes, la naturaleza y cantidad de los delitos, y el lugar donde presuntamente habrían estos ocurrido, careciendo este pronunciamiento de motivación en cuanto a la existencia de los ilícitos, la participación del imputado en ellos y la necesidad de cautela; lo anterior, precisamente porque ni la fiscalía ni los querellantes se refirieron a dichos requisitos. Junto a lo anterior, esgrime que el tribunal tampoco indicó porqué se desechaba la tesis de la defensa o los motivos para no considerar las cautelares propuestas por la defensa.

Afirma la ilegalidad de la decisión recurrida en base a la inobservancia de los artículos 36, 122 y 143, todos del Código Procesal Penal, lo que ha privado a su defendido de su derecho a la libertad individual, configurándose así los requisitos de procedencia para que esta acción de amparo sea acogida, no obstante a ello el hecho de que exista un recurso ordinario de apelación dada la imposibilidad de argumentar en contra de una resolución que carece de la fundamentación suficiente.

Finalmente da cuenta de fallos de la Excma. Corte Suprema y de tribunales superiores en los cuales queda de manifiesto que las resoluciones que ordenen la prisión preventiva deben expresar de forma clara los motivos o fundamentos por los que se da lugar a dicha medida cautelar y como es que los argumentos de la defensa y sus propuestas sobre cautelares alternas no resultan suficientes para desvirtuar las alegaciones del ente persecutor.



Pide acoger el recurso de amparo y que se deje sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, disponiendo inmediata orden de libertad en favor del amparado.

**Segundo:** Que informan al tenor del recurso doña Azeneth Aguilar Navarro, Katiuska Sobarzo Sobarzo y Ana María Vega Ramírez, juezas titulares y suplente del Tribunal de Juicio Oral de San Bernardo, respectivamente, indicando que en la audiencia de 3 de marzo pasado, luego de escuchar las exposiciones de los comparecientes, por razones de economía procesal y atendido que la defensa expuso latamente argumentos de fondo, se acotó la decisión en base a los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal para decretar la prisión preventiva del acusado, la que estuvo fundada tanto en los hechos como en el derecho, no pudiendo soslayarse para ello la resolución que anuló el primer juicio oral, pues fue parte del debate y tuvo por fundamento que hubo una intervención del acusado en los hechos. Además, indican que se tuvo en cuenta la naturaleza de los ilícitos imputados (homicidio calificado consumado y homicidios frustrados); la prognosis de pena; las circunstancias de la comisión de los ilícitos (uso de armas de fuego en la vía pública) y el peligro para la seguridad de la sociedad, fundamentos que justificaron la intensidad de la necesidad de cautela, haciendo innecesario pronunciarse respecto de la pertinencia de las otras medidas cautelares solicitadas por la defensa.

Refieren que a tal punto fue la intervención de los actores y defensa respecto de la causa de fondo, que la sala debió inhabilitarse, según resolución de la misma fecha, cuestión que fue acordada fuera de audiencia por esas juezas.

Por otra parte, hacen presente que en este caso ya existía un pronunciamiento anterior -de una sala con integración diversa- en el mismo sentido que fue resuelto por la resolución impugnada, de lo cual se sigue que el perjuicio alegado por la defensa no se configura.

En consecuencia, recalcan que inclusive en esta breve relación de lo decidido se demuestra que las alegaciones de arbitrariedad e ilegalidad esgrimidas por el abogado recurrente no son aplicables a este caso y que su



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKTBXTTEZNE

pretensión debe ser resuelta a través de los recursos que la ley provee para ello, esto es, el recurso de apelación y no por esta vía.

**Tercero:** Que, el artículo 21 de la Constitución Política de la República establece que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Agrega su inciso tercero que el mismo recurso podrá ser deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

**Cuarto:** Que, por la presente vía, se ha denunciado como ilegal por falta de fundamentación, la resolución dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo el 3 de marzo último, que resolvió decretar la prisión preventiva del imputado en cuyo favor se recurre.

**Quinto:** Que del recurso y las alegaciones vertidas en estrados por el recurrente, fluye que la falta de fundamentación que se reprocha a la resolución de 3 de marzo pasado dice relación con aspectos valorativos de la falta de consideraciones completas acerca de la teoría alterna de la defensa del imputado acerca de la participación de su defendido en los hechos, aspectos todos que se vinculan con la teoría de la participación criminal en los injustos materia de la imputación, tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos, lo que el tribunal recurrido, lícitamente no puede realizar en este estadio procesal en el que se cuenta solo con antecedentes parciales, una investigación inacabada y más aún sin conocer el mérito de la carpeta investigativa.

**Sexto:** Que, es dable considerar que la resolución objeto del presente arbitrio es una que emite pronunciamiento acerca de una medida cautelar en los términos del artículo 140 y 122 del Código Procesal Penal, y el baremo en base al cual ha de emitirse pronunciamiento, no tiene la entidad del juicio de fondo que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKTBTTEZNE

exige el artículo 340 del citado código adjetivo, contentándose con una justificación que de cuenta “de antecedentes” y no requiriéndose prueba completa.

Sobre este tópico, la Excma. Corte Suprema, ha sostenido que el estándar o baremo para los efectos de imposición de cautelares es de menor entidad que el requerido para la formación de la convicción condenatoria por parte del tribunal del fondo y de ahí la exigencia del artículo 140 del código ya aludido, demandando la exigencia de “antecedentes” y no “pruebas”, exponiendo expresamente al respecto que “lo que se ha venido expresando no importa, de modo alguno, elevar los deberes y cargas de fundamentación de la resolución que decreta la prisión preventiva a aquellos propios de una decisión condenatoria descritos en el artículo 342 del Código Procesal Penal, pero sí reconocer que el legislador no se contenta con aquel propio de toda resolución judicial establecido en el artículo 36 del mismo texto, el que, en todo caso, por constituir un requisito general, también debe ser cumplido en la resolución que se dicte conforme al artículo 143 del mismo código.” (Rol 56.345-2024, de 13 de noviembre último).

**Séptimo:** Que, atendida la naturaleza y objeto del arbitrio que nos convoca no es labor de esta Corte, en esta sede, emitir pronunciamiento ni efectuar valoraciones probatorias acerca de las teorías del caso de fondo de los intervinientes, pues incursionar en esta tarea, sin intermediación y sin conocer los detalles de las pruebas rendidas podría importar incurrir en una causal de inhabilidad, respecto de una causa que eventualmente podría ser en alguna oportunidad revisada por esta misma magistratura, lo que parece forzoso evitar.

**Octavo:** Dicho lo anterior, no cabe sino concluir que del atento examen de la resolución cuestionada, expedida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo no incurre en el vicio que se le endilga o atribuye, toda vez que contiene argumentaciones de hecho y derecho y se hace cargo de los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, según se lee de los basamentos de la propia sentencia, invocando como elementos para su decisión la naturaleza (sin duda grave) de los delitos materia de la formalización, la gravedad de las penas asignadas por el legislador a tales ilícitos (todas penas de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKTBXTTEZNE

crimen), la menor edad de las víctimas y las circunstancias de comisión del delito, en un contexto que los hechos materia de la formalización impresionan como violentos y darían cuenta de una actuación en grupo o pandilla, lo que permite realizar un juicio de disvalor de acción que lícitamente puede ser considerada a la hora de justipreciar los fundamentos materiales del injusto descrito en las letras a) y b) del artículo 140 ya aludido.

**Noveno:** Que, de esta suerte, conteniendo la resolución en estudio los basamentos y consideraciones que es dable exigirle atendida el propósito y baremo de resolución contra la que se recurre, no advierten estos sentenciadores afectación alguna al principio de debido proceso, ni vulneración a derecho fundamental alguno de aquellos consagrados en la Carta Fundamental cuyo resguardo debe ser supervigilado por esta Corte mediante el uso de las facultades conservadoras de que está provista.

De otra parte, del mérito de los antecedentes fluye que el tribunal recurrido ha actuado dentro del marco de su competencia, en uso de las facultades que le son privativas, ha emitido pleno pronunciamiento acerca del negocio que se ha sometido a su conocimiento, aunque lo ha hecho mediante argumentaciones que no son compartidas por la defensa del imputado.

Es lo certero, que la resolución recurrida al pronunciarse acerca de la necesidad de cautela en este caso y la letra c) del artículo 140 ya tantas veces citado, dio cumplimiento a la exigencia contemplada en el artículo 122 del mismo cuerpo legal, en orden a justificar el carácter excepcional y de última ratio de la prisión preventiva que se decreta.

**Décimo:** Que por las razones antes expuestas, no se advierte la ilegalidad reprochada lo que conduce a desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Amparo, **se rechaza** el recurso de amparo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKTBXTTEZNE

interpuesto a favor de Ricardo Iván Sandoval Lincopi en contra del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de San Bernardo.

Comuníquese, regístrese y archívense en su oportunidad.

**N°307-2025 Amparo**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKTBTTEZNE

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Sylvia Pizarro B., Maria Alejandra Pizarro S. y Ministro Suplente Christian Carvajal S. San Miguel, siete de marzo de dos mil veinticinco.

En San Miguel, a siete de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKTBTTEZNE